



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**“Aplicación del debido procedimiento en los actos administrativos emitidos por el
SAT en el marco del derecho de defensa como garantía constitucional”**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR

Diego Alonso Colán Arhuire

ASESOR

Mg. Ángel Fernando La Torre Guerrero

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Derecho Administrativo

LIMA-PERÚ

2017

Página del Jurado

Presidente

Secretario

Vocal

Dedicatoria:

A mi madre, por el apoyo constante e incondicional y a mi familia.

Agradecimiento:

A mis asesores, amigos y compañeros de trabajo por el apoyo en el presente producto de investigación.

Declaración Jurada de Autenticidad

Yo, DIEGO ALONSO COLÁN ARHUIRE, identificado con DNI N° 47490788, a efectos de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, declaro bajo juramento que toda la documentación acompañada al presente es veraz y auténtica.

De la misma manera, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presentan en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 12 de julio de 2017.

DIEGO ALONSO COLÁN ARHUIRE

DNI : 47490788

Presentación

Señores miembros del jurado:

La presente tesis tiene por título “Aplicación del debido procedimiento en los actos administrativos emitidos por el SAT en el marco del derecho de defensa como garantía constitucional”. Ya que, para este humilde estudiante de derecho, en aplicación de los conocimientos obtenidos en esta casa de estudios, ha tenido a bien estudiar la aplicación de los derechos constitucionales en mención, dentro del procedimiento administrativo llevado a cabo por la autoridad administrativa, en este caso el Servicio de Administración Tributaria; respecto al procedimiento administrativo sancionador referente a lo establecido por la Ordenanza N° 1599-MML, “Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana”. A fin de contrastar lo normado por la Constitución en dicho procedimiento.

Significando ello un análisis amplio no sólo de normativa nacional, sino también extranjera, así como abarcando del mismo modo, teorías de distintos autores, tanto nacionales como internacionales, las cuales se encuentran vinculadas al tema materia de estudio.

A su vez, acogiendo antecedentes relacionados al presente trabajo investigativo a fin de lograr sentar una posición, la cual se reforzará con el manejo de instrumentos de recolección de datos establecidos por la oficina de investigación de la escuela profesional de Derecho de esta universidad, a fin de contrastar los supuestos jurídicos establecidos en la matriz de consistencia y con ello lograr arribar a una conclusión y determinar una posterior recomendación.

El Autor

RESUMEN

El presente trabajo investigativo tiene por finalidad analizar la existencia de una debida aplicación del derecho al debido procedimiento dentro de un procedimiento administrativo sancionador llevado a cabo por el SAT respecto a las Actas de Control impuestas en mérito a lo regulado por la Ordenanza Municipal N° 1599-MML, partiendo del respeto al derecho de defensa del administrado. Por lo que para la presente investigación se empleó el diseño de la teoría fundamentada y el enfoque cualitativo, por lo que se utilizará guía de entrevistas efectuadas a especialistas, así como el análisis documental y jurisprudencial. Por lo que se concluye la inexistencia del debido procedimiento dentro de un procedimiento administrativo sancionador, ello en función a que dentro de este procedimiento no se le permite ejercer la defensa a los administrados quienes poseen legitimidad para obrar, de manera que estos no pueden salvaguardar sus intereses.

Palabras claves: Debido procedimiento, derecho de defensa, procedimiento administrativo sancionador.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the existence of a proper application of the right to due process in an administrative procedure sanction carried out by the SAT with respect to the Control Acts imposed in virtue of what is regulated by Municipal Ordinance No. 1599 -MML, starting from the respect to the right of defense of the administered. Therefore, the design of the grounded theory and the qualitative approach were used for the present investigation, so a guide of interviews with specialists will be used, as well as documentary and jurisprudential analysis. Therefore, it is concluded that there is no due process in an administrative sanctioning procedure, due to the fact that within this procedure, it is not allowed to exercise the defense to the administrators who have the legitimacy to act, so that they cannot safeguard their interests.

Key words: Due process, right of defense, sanctioning administrative procedure.

ÍNDICE

	Pág.
Página del Jurado	ii
Declaración Jurada de Autenticidad	v
Presentación	iv
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
Índice	ix
I. INTRODUCCIÓN	
Aproximación Temática	2
Trabajos Previos	4
Teorías relacionadas al tema	8
Formulación del problema	21
Justificación del estudio	24
Objetivos	25
Supuestos	26
II. MÉTODO	
2.1 Tipo de estudio	28
2.2 Diseño de estudio	28
2.3 Caracterización del sujeto	28
2.4 Población y muestra	30
2.5 Técnicas e instrumento de recolección de datos	30
2.6 Métodos de análisis de datos	31
2.7 Tratamiento de la información	31
2.8 Aspectos éticos	32
III.. RESULTADOS	33
IV.. DISCUSIÓN	47
V.. CONCLUSIONES	54
VI.. RECOMENDACIONES	56
VII.. REFERENCIAS	58
ANEXOS	63

I. INTRODUCCIÓN

Aproximación temática

Históricamente, se han ideado diversas formas para la resolución de controversias entre la administración pública y los administrados. Durante el absolutismo, la justicia administrativa se confirió y concentró en órganos eminentemente administrativos, no jurisdiccionales. Este modelo fue abandonado con las revoluciones liberales del siglo XVIII, en donde se comienzan a diseñar fórmulas que incluían la participación de tribunales administrativos en la solución de controversias entre administración y los administrados. Todo ello con motivo de la clásica división de poderes propuesta por Montesquieu (Rojas, 2011, p. 178).

La justicia administrativa nace en la Revolución Francesa, ya que en aquella época se pretendía implantar una forma de gobierno en la que la ley estuviera por encima del hombre, tal como señala Rousseau al decir que “un pueblo libre obedece, pero no sirve; tiene jefes, pero no dueños, obedece a las leyes, pero nada más que a las leyes y es por fuerza de las leyes por lo que no obedece a los hombres”. (Rojas, 2011, p.177).

Hasta aquel entonces el control de la actividad de la Administración resultaba ilusorio, puesto que este era solo una herramienta empleada por el monarca para beneficio suyo; con la revolución de 1789 cambia de forma drástica esta figura absolutista, puesto que se abriría paso para que la administración adquiriera una regulación o límite legal, tanto el aspecto organizacional como la propia actividad que esta desempeñaba debían limitarse a las disposiciones legales.

Con la instauración de la primera constitución revolucionaria de 1791, en Francia surge el principio de legalidad, el mismo que resulta de gran utilidad para el Derecho administrativo; tal es así que en dicha carta magna se estableció elementos de control interno para hacer efectivo dicho principio, razón por la que en este dispositivo se le otorgó la función controladora al Consejo de Ministros. Con esta medida se aparta totalmente el ejercicio del control judicial de la actividad administrativa en función del principio de separación de poderes.

La problemática se enmarca en el ámbito del derecho público, toda vez que la presente investigación recae sobre la vulneración al derecho al debido

procedimiento, el cual se encuentra relacionado al derecho al debido proceso el cual se encuentra determinado en el Art. 139.3 de la Constitución Política de 1993, el mismo que a su vez se encuentra ampliamente enlazado al derecho de defensa, que se ve violentado en el procedimiento administrativo sancionador mediante actos administrativos que son emitidos por una entidad pública.

En esta investigación, analizaremos si se aplica de forma correcta el debido procedimiento administrativo, y a su vez, si existe alguna vulneración al derecho de defensa en virtud a la los Actos Administrativos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria de Lima, el cual es un Organismo Público descentralizado perteneciente a la Municipalidad Metropolitana de Lima la misma que posee autonomía económica, administrativa, financiera y presupuestaria; su finalidad es organizar y llevar a cabo la administración, fiscalización y recaudación de todos los conceptos tributarios y no tributarios de la entidad municipal en mención. Por ende, se encuentra facultada para efectuar las acciones necesarias para cumplir con su finalidad fiscalizadora y recaudadora, para ello se basa en la aplicación de diversas ordenanzas municipales las mismas que regulan distintas actividades y/o conductas que se lleven a cabo dentro del marco territorial de Lima Metropolitana. Una de estas es la ordenanza N° 1599, la cual regula el transporte regular de personas en Lima metropolitana, incluyéndose en este las sanciones administrativas respectivas para cada tipo de infracción de acuerdo a la tabla que en ella se incorpora.

Ahora bien, de lo expuesto precedentemente, se observa que dicho dispositivo regula, entre otras cosas, el procedimiento administrativo sancionador respecto de la comisión de infracciones u contravenciones de las disposiciones y obligaciones del servicio de transporte regular de personas. Tal es así que al ser una ordenanza municipal que regula y establece sanciones administrativas, su actuación debe ajustarse a lo dispuesto por las normas de mayor jerarquía, las mismas que establece Kelsen, el principio de constitucionalidad, que señala que las normas constitucionales tienen preeminencia por sobre cualquier otra norma, debajo de ella, respetando el orden jerárquico instaurado en nuestro ordenamiento jurídico.

Las normas constitucionales poseen supremacía sobre cualesquiera otras del sistema por lo que cuando éstas se les oponen formal o materialmente, se preferirá aplicar las primeras. Tal como señala de la sentencia del Tribunal Constitucional N° 005-2003-AI/TC “Todo deriva de la Constitución y todo ha de legitimarse por su concordancia directa o indirecta con la Constitución”, en cuanto al principio de constitucionalidad se refiere.

Del mismo modo siguiendo el orden jerárquico normativo, se debe tener en cuenta que dicha ordenanza debe encontrarse conforme a lo dispuesto por la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el régimen jurídico aplicable para la práctica de la administración pública; y al ser la Municipalidad Metropolitana de Lima una entidad pública que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, resulta imposible que ésta al emitir una Ordenanza Municipal prescinda de lo dispuesto por los cuerpos normativos señalados anteriormente.

Trabajos previos

Ya anticipadamente algunos autores han puesto a relieve el protagonismo que cumple el derecho de defensa de los administrados en los procedimientos administrativos, así como el derecho al debido procedimiento, tal es así que el Nunja García (2013), señala las consideraciones que se debe tener en cuanto a la defensa en el procedimiento administrativo, de tal forma que señala:

El derecho a la defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que se encuentra reconocido en el Numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, el cual refiere que todo administrado tiene derecho a exponer los argumentos que sustentan su defensa (p. 14)

Por lo que, se estima que, si no se garantiza el derecho de defensa, el cual conforme lo señala el autor, constituye un derecho fundamental que efectiviza su naturaleza, tanto en un proceso judicial como en un procedimiento administrativo, y centrándonos en este último, consiste en que el administrado sustente ante la autoridad administrativa su defensa. La cual tendrá un gran valor para el

recurrente si se trata sobre un procedimiento sancionador, por las consecuencias negativas que recaerán sobre aquel.

Del mismo modo, resalta lo expresado por el Tribunal Constitucional que sostiene que:

[...] el derecho a la defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra. (p.15).

De ello se desprende que, para garantizar que el administrado haga efectivo su derecho de defensa, no sólo implica el hecho de permitirle ejercerlo, puesto que para ello debe contar con los presupuestos necesarios como el de informarle sobre la decisión administrativa de manera anticipada y los brindarle los medios idóneos para que este pueda efectivizarlo. Ello lo reitera Nunja (2013), señalando que:

Por su parte, la Corte IDH sostiene que el derecho de defensa implica que los administrados tengan conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les imputan, cuenten con un plazo razonable para ejercer su defensa y puedan presentar medios probatorios. (p. 15).

Respecto del derecho del administrado a ofrecer y producir pruebas dentro del procedimiento administrativo, expresa lo siguiente: “[...] que la producción y valoración de pruebas está vinculada a la motivación de las decisiones y al resultado del procedimiento administrativo, dado que su consideración definirá el sentido de la decisión final.” Por lo que se aprecia la importancia que tiene dentro de este procedimiento el hecho que el administrado produzca y ofrezca pruebas, en tanto mediante la oportuna valoración de estas, la autoridad administrativa aplicando una debida motivación concluirá en una acertada decisión. (Nunja, 2013, p. 16).

En ese mismo sentido José Nuja (2013), señala que “[...] la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad y, por ende, una vulneración del debido procedimiento administrativo.” Por lo que resulta indispensable la

motivación en los Actos Administrativos, puesto que ante la inexistencia de aquello nos encontraríamos ante una contundente arbitrariedad por parte de la autoridad administrativa y por ende no se garantizaría un debido procedimiento, en consecuencia, una grave lesividad a aquella garantía constitucional que debería gozar todo administrado. (p. 17).

En lo que respecta al derecho que tiene el administrado a impugnar la decisión adoptada por la autoridad administrativa, rescata lo señalado por el máximo intérprete de la Constitución expresando que: “[...] el derecho a impugnar las decisiones administrativas implica la posibilidad material de poder cuestionarlas mediante los mecanismos previstos en el procedimiento administrativo” (p. 22). Lo que se traduce en que si bien es cierto la ley le faculta a la autoridad administrativa sancionar a un administrado por causales determinadas, eso no quiere decir que estos ante tal situación no puedan objetar dicha decisión, puesto se les debe prever de mecanismos que le permitan impugnar la decisión adoptada por la autoridad administrativa, de forma que se evite una arbitrariedad por parte de esta, por lo que dicho derecho impugnatorio forma parte de una garantía al debido procedimiento.

Por otro lado, Betsabé Ramírez (2006) en su tesis titulada “el derecho a la defensa en el procedimiento administrativo sancionatorio” en la que señala que:

El derecho de defensa es una garantía constitucional inalienable, aplicable en todo grado, fase, o etapa del procedimiento administrativo mediante la cual el imputado puede conocer de los hechos cuya actuación se le señalan como propios, los cuales constituyen ilícitos administrativos, así como el de presentar pruebas y argumentos que desvirtúen la posición o criterio de la Administración y demostrar su inocencia o ausencia de culpabilidad de los hechos imputados con la finalidad de evitar la aplicación de sanciones administrativas (p. 13).

De lo precitado por la autora podemos apreciar el valor del derecho de defensa que tiene dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio. Puesto que como se advierte, mediante la aplicación de este derecho el administrado podrá presentar pruebas y esgrimir fundamentos para probar la inexistencia de culpabilidad en los hechos materia de sanción que la administración le atribuye.

Del mismo modo, respecto al debido procedimiento expresa que:

[...] es un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el imputado, entre los que figuran, el derecho a ser oído, a la articulación de un procedimiento debido, derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas, de la misma manera debe comprender una serie de elementos característicos tales como: que el funcionario encargado de ejecutar la actividad sancionatoria, se ajuste a los principios de legalidad formal y material, relacionados con la atribución de competencia para dictar un acto administrativo de naturaleza sancionatoria. (Ramírez, 2006, p. 20).

De ello se tiene que, al igual que el autor José Nunja, el derecho al debido procedimiento constituye una garantía constitucional que a su vez abarca otros derechos los cuales son necesarios para que la autoridad administrativa no abuse de las facultades que la ley le otorga, restringiendo de esta manera una posible arbitrariedad en su interactuar con los administrados.

De otro lado, Rojas (2014), señala en su tesis “Los principios constitucionales limitadores del *Ius Puniendi* ¿Qué límites rigen el Derecho Administrativo Sancionador en el Perú?” respecto al derecho administrativo sancionador lo siguiente:

El Derecho Administrativo Sancionador está presente en la interrelación cotidiana del Estado con sus administrados, es decir, aparece en cada sector de la vida diaria en que el Estado tiene presencia o interviene para regular dicha actividad. Así, si una empresa de telecomunicaciones infringe la normatividad del sector, puede ser pasible de una sanción si incurre en alguno de los supuestos calificados previamente como infracción. Igual sucede con el conductor de un vehículo: cuando infringe la normatividad del sector (el Código de Tránsito), se le impone una multa administrativa. Esta misma lógica puede apreciarse en el ámbito del transporte (aéreo, marítimo, fluvial), la libre competencia, la pesquería, el medio ambiente, la contratación pública, el ámbito tributario, etc. (p.41).

De lo precitado, se aprecia que el derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad la interacción del Estado con los administrados, mediante el cual va a regular la actividad diaria de estos, e imponer sanciones si estos incurren en la

comisión de una infracción tipificada en la norma previamente, para la cual existen diversas regulaciones normativas, las cuales rigen en distintos aspectos y campos en los cuales se desenvuelven a diario los administrados.

Teorías relacionadas al tema

El Debido Proceso:

El debido proceso es una garantía constitucional, que se encuentra contemplada en el artículo 139, en el inciso 139.3 de nuestra carta magna, el cual regula el debido proceso y la tutela jurisdiccional que tiene toda persona.

Es preciso indicar que el debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, el cual se encuentra conformado por el debido proceso adjetivo, que se refiere a las garantías procesales que aseguran la vigencia de los derechos fundamentales; y el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de leyes contrarias a los derechos fundamentales (Landa, 2010, p. 448).

Para Guzmán Napurí (2016), el debido proceso es el conjunto de garantías necesarias para que un proceso en el cual se va a tomar una decisión pueda ser considerado justo. Pues el debido proceso desde la perspectiva constitucional, es un derecho complejo, el cual al mismo tiempo engloba a otros derechos de naturaleza incompleja. (p. 38).

Asimismo, es preciso señalar, que el debido proceso es un derecho contemplado en constituciones de otros países, tal es así que la Constitución Política de Colombia, prescribe en su artículo 29° que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas [...]”.

Aquí apreciamos que no solo se manifiesta taxativamente sobre las actuaciones judiciales sino también esta regulación se extiende a las actuaciones administrativas, es decir aquellas que emanan de la Administración Pública.

La Constitución Política de Ecuador, señala en el numeral 27 del artículo 23° que esta “[...] garantizará a las personas los siguientes: [...] 27. El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones”. Del mismo modo en su artículo 192°

expresa que: “El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará efectivas las garantías del debido proceso [...]”.

Respecto a ello, la Constitución Política de Bolivia señala en el artículo 115° inciso II: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa [...]”.

De esta última, podemos apreciar que además de garantizar el debido proceso también hace mención a la garantía del derecho a la defensa, tema que desarrollaré más adelante, puesto que guarda relación con aquello que se pretende contrastar dentro de los procedimientos administrativos materia de análisis.

De otro lado y luego de analizar la normativa de otros países, se tiene que existe un consenso en lo que respecta al debido proceso en las Constituciones de los países mencionados y ello no se ha mostrado ajeno a nuestra Constitución Política vigente tal como se señaló anteriormente.

Del mismo modo, debemos tener en cuenta que este derecho abarca a otros de importancia relevante, como el derecho al proceso predeterminado por ley, a la defensa, a impugnar la decisión tomada, a la motivación en las resoluciones por la entidad respectiva; lo que se encuentra establecido en la normatividad adjetiva y en conjunto garantiza derechos subjetivos de las personas, rasgos determinantes de un Estado de derecho.

A modo de contrastación lo expresado por la normativa constitucional, debemos tener en cuenta lo apuntado por Ossa Arbeláez (2009), el cual señala que las garantías que forman parte del debido proceso son aplicadas al derecho administrativo, puesto que, en este se les permite hacer valer el derecho de defensa, de contradicción, controversia de pruebas y otros, los que a su vez son considerados garantías constitucionales que rigen sobre toda actividad de la administración y que deben ser efectivos desde la iniciación hasta la conclusión de este. (p. 234).

Debido procedimiento administrativo

El debido procedimiento constituye una garantía constitucional, en cuanto, en la constitución vigente, señala expresamente como ya mencioné anteriormente, en el artículo 139.3.; así mismo es preciso indicar que no basta que se garantice sustantivamente el derecho, sino también se debe establecer los medios bajo los cuales hará efectivo este derecho, que es en este caso el derecho adjetivo el cual se proyecta en el debido procedimiento administrativo, el cual a su vez se materializa mediante un procedimiento idóneo, dirigido por la Administración de acuerdo a las facultades conferidas a esta mediante ley.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, establece lo siguiente:

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: [...]
- 1.2 Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo, La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

Podemos apreciar de esta regulación, a la cual, el legislador ha tenido a bien denominarle “principio”, no es más que aquello que conocemos como el derecho al debido procedimiento administrativo; aquel que comprende que las actuaciones de la administración pública realizadas mediante actos administrativos para con los administrados, deben efectuarse respetando su derecho a exhibir sus argumentos o pruebas que consideren pertinentes a fin de conseguir una decisión justa. Ello comprende que los administrados puedan ejercer su derecho de defensa dentro de un procedimiento administrativo.

Ahora bien, en lo que respecta al debido procedimiento en materia sancionadora, se afirma que ello comprende que las entidades al momento de imponer una sanción, deberá estar sujeta al procedimiento establecido teniendo en cuenta las garantías del debido proceso, puesto que la resolución emitida por la Administración será de carácter perjudicial para el administrado, por lo que se debe incluir a ello, el ejercicio del derecho de defensa. (Guzmán, 2016, p. 38)

Del mismo modo, a manera de comparación, se aprecia que esto también se encuentra tutelado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia en el artículo 3° numeral 1, que señala:

“En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.”

De ello se desprende que la normativa de este país contempla de igual forma como un principio, el derecho al debido proceso, el cual a su vez abarca dentro de este a los derechos de defensa y contradicción que goza todo administrado dentro del mencionado procedimiento.

Cabe señalar que el procedimiento administrativo como garantía del administrado, se vuelve más estricto cuando versa sobre el ámbito sancionatorio de la administración, ya que en esta parte se desenvuelve la potestad sancionadora que la ley le ha facultado, lo que a su vez implica que en el procedimiento administrativo sancionatorio deba primar aquellos aspectos mínimos de protección establecidos.

El derecho de defensa:

El derecho de defensa es un derecho fundamental, reconocido por nuestra constitución política y es de naturaleza procesal, así mismo, este no solo debe ser aplicado en un proceso judicial, sino también en los procedimientos administrativos que son efectuados por todas aquellas entidades administrativas.

Este derecho es reconocido por el numeral 1.2 del artículo IV del título preliminar de la ley 27444, el mismo que señala que todo administrado tiene derecho a exponer los argumentos que sustenten su defensa, derecho de suma importancia tal como lo resaltaron los autores de los trabajos previos al presente.

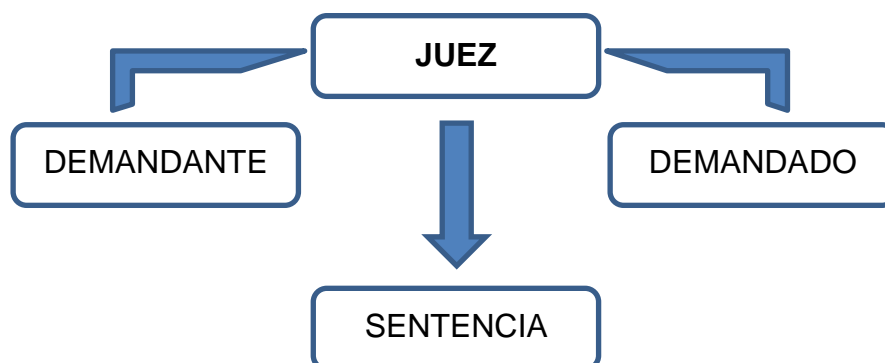
Al respecto Ossa Arbeláez (2009), señala que el derecho de defensa dirige todo el esquema sancionatorio de la administración pública y constituye un axioma jurídico que se levanta, en primera línea, en todos los estadios del universo jurídico. (p. 242)

La defensa comprende una parte importante del derecho al debido proceso, el cual es reconocido por la Constitución Política en el artículo 139, numeral 14, el cual prescribe: “Principio de la Administración de Justicia: Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...] El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso.”

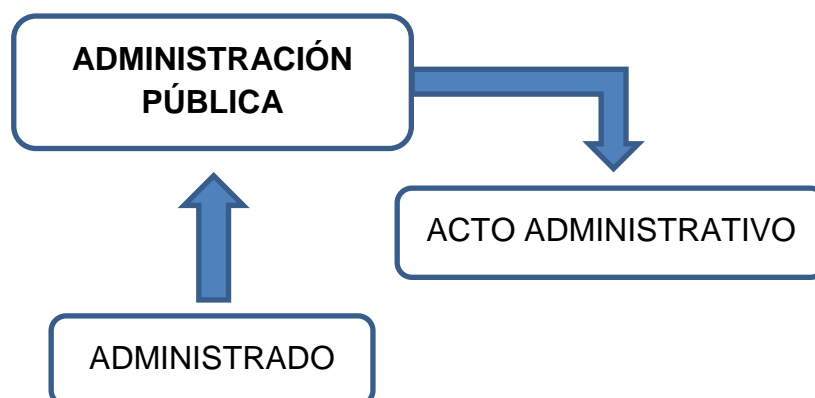
El procedimiento administrativo:

En este punto es menester distinguir al proceso, del procedimiento, por ello resaltaré lo señalado por el Dr. Manuel María Díez (1981), el cual refiere al respecto que el proceso y el procedimiento tienen en común que ambos son una serie, o sucesión de actos convenidos, sin embargo mientras que en el primero esta serie de actos se dilucida ante un tercero imparcial e independiente que está por encima de las partes (que es el juez) y finaliza en un acto judicial, que viene a ser sentencia, aquella que tiene fuerza de verdad legal; mientras que en el procedimiento la serie o sucesión de actos coordinados concluye en un acto administrativo, en una decisión de la autoridad administrativa que no tiene por supuesto el carácter de cosa juzgada. Sino más bien el de cosa decidida. Por lo que se ha llegado a decir que todo proceso comporta un procedimiento, en cambio no todo procedimiento implica o comporta un proceso. (p. 482).

Proceso:



Procedimiento:



Aclarada estas definiciones, continuaremos con las apreciaciones referidas al procedimiento administrativo de distintos autores.

Ortiz, (1981), sostiene que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos preparatorios concatenados según un orden cronológico y funcional, para verificar la existencia de la necesidad pública de satisfacer y de los hechos que lo crean, así como para oír a los posibles afectados y voceros de intereses conexos, tanto públicos como privados, especialmente estos últimos, con el fin de conformar la decisión en la forma que mejor los armonice con el fin público a cumplir. (p. 321).

De lo expuesto anteriormente, se aprecia que el procedimiento administrativo es un conglomerado de actos preparatorios que poseen un orden y que responden a la necesidad pública los mismos que, además de ello, de ser el caso, deben atender a los afectados de las actuaciones de la administración, para que así ésta cumpla con el rol público que debe desempeñar.

El procedimiento administrativo es una serie de trámites y formalidades exigidas para la realización de un acto administrativo, otorgándole un doble propósito: en primer lugar, perseguir la adecuada y correcta marcha del ente administrativo; y, en segundo lugar, tutelar, preservar los derechos e intereses de los administrados, para que no sean afectados por la expresión de voluntad de la administración (Cervantes, 2015, p. 399).

Para Sánchez (2014), “[...] el Procedimiento Administrativo es la forma de elaboración de las decisiones administrativas o, si se prefiere, de ejercicio de la actividad administrativa formalizada”. Es decir, el procedimiento administrativo es aquel mecanismo de elaboración de la decisión de la Administración, el cual, tal como lo señala el autor “[...]debe garantizar el acierto de la decisión discrecional, también la más apropiada al interés general, ya sea en términos políticos, técnicos o económicos.” (p. 488).

Agustín Gordillo, (2000), define al procedimiento administrativo como la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen de la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. Estudia, por lo tanto, la participación y defensa de los interesados en todas las etapas de la preparación de la voluntad administrativa y desde luego, como debe ser la tramitación administrativa en todo lo que se refiere a defensa, participación e intervención de dichos interesados. (p. 323).

La ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, define al procedimiento administrativo en su artículo 29° de la siguiente manera:

Artículo 29°. Definición del procedimiento administrativo. - El conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.

El derecho administrativo es de formación continua y constante, por ello, la doctrina centra su interés no tanto al acto administrativo como fruto del procedimiento, sino más bien al instrumento previo a la emisión del acto, aquella institución denominada “Procedimiento Administrativo” (Marienhoff, 1998, p. 255).

De lo señalado por el autor en el párrafo anterior, se entiende que no solo es importante el resultado del procedimiento administrativo, sino más bien, verificar si en el procedimiento previo se ha cumplido con los parámetros establecidos por ley, así como también si se ha respetado los derechos del administrado, para la exteriorización de la voluntad de la administración, la cual se materializa en el Acto Administrativo.

Es importante tener en cuenta que todo procedimiento administrativo iniciado de oficio requiere de un acto de inicio el cual le otorgará validez. De forma que el sustento de todo acto que dé inicio a un procedimiento debe contener una debida motivación, ya que, de no ser así, demostraría una clara ilicitud desde su comienzo, y consecuentemente sería nulo.

Asimismo, Guzmán Napurí (2016), refiere que la notificación del acto de inicio del procedimiento, debe ser notificado a todos aquellos administrados sobre los cuales se verá reflejada una afectación a sus intereses o derechos por los actos a ejecutar por parte de la Administración, con la finalidad de que aquellos puedan hacer ejercicio de su derecho de defensa de manera oportuna. (p. 246)

De lo expuesto en esta parte, podemos afirmar que el procedimiento administrativo se idea a partir de un conjunto de actuaciones que se desenvuelven dentro de un expediente el cual está inspirado por la administración, o provocado por el administrado; este finaliza con un acto, el cual no es más que la expresión genuina de la voluntad de la administración, la cual debe fundarse en una correcta aplicación del procedimiento predeterminado por ley, respetando el derecho del recurrente y las normas de mayor jerarquía, a fin de que el acto administrativo no devenga en nulidad, lo que perjudicaría sustancialmente al administrado y reflejaría una deficiencia en la actividad administrativa.

Finalidad del procedimiento administrativo

Según lo expresado por Guzmán Napurí (2016), el procedimiento tiene una doble finalidad, de las cuales, la primera es la constitución de una garantía de los derechos de los administrados, ya que éste es el efecto que posee un Estado de Derecho frente a la potestad autoritativa de la Administración Pública; en función a

que prima el respeto de los derechos fundamentales, y las facultades administrativas están sometidas a la Ley. En segundo lugar, este procedimiento debe afianzar la satisfacción del interés general, puesto que contiene principios como el de la participación de los administrados en el procedimiento y toma de decisiones de la Administración, con lo que se logra controlar el poder de ésta, de tal manera que su uso no sea arbitrario. (p. 6).

De otro lado, se advierte que en el procedimiento existe una doble finalidad: garantizar los derechos de los particulares y lograr el mayor acertamiento y eficacia en las resoluciones administrativas. Puesto que el procedimiento es un mecanismo netamente tuitivo tanto para la administración como para el administrado. Por tal razón este debe considerar todos aquellos aspectos que aseguren la defensa del presunto infractor y el acierto en la decisión, la cual debe ser efectiva e imparcial.

Principio de legalidad

El Estado y por ende la Administración Pública, debe ser paradigma en el cumplimiento del derecho. La autoridad administrativa está obligada a actuar de regladamente, no arbitrariamente. En cierta forma, si no lo es en todo, el principio de legalidad limita el poder administrativo.

De acuerdo al Dr. Laubodere (1999), el principio de legalidad es el conjunto de leyes y de reglamentos a los cuales se somete la actividad administrativa, señala como fuente de dicha legalidad el texto constitucional y las demás leyes y reglamentos, así como el respeto a los tratados internacionales. Toda decisión de la administración que tenga efectos sobre los administrados debe encontrarse sometida a ley, de lo contrario esta resultaría ilegal, arbitraria, y consecuentemente resultaría nula; lo que expresaría un serio problema en lo que respecta a la aplicación normativa por parte de la autoridad administrativa. (p. 246)

Por el principio de legalidad, debe entenderse que no solo basta sustentar mediante bases legales el acto administrativo, sino que la administración se encuentra obligada a integrar dentro de esta decisión, el derecho; es decir, se

desea que el acto emitido no solo sea legal, sino que además de fundarse en la norma legal también se encuentre formada dentro del marco normativo general, de modo tal que esta actuación administrativa opere con justicia.

De acuerdo al artículo V del Título Preliminar de la ley 27444, en cuanto señala que las autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho; debe entenderse que la finalidad del procedimiento administrativo es la de emitir el Acto Administrativo, el cual requiere para su validez esencialmente la Legalidad, por lo que el acto en sí no solo debe fundarse en aquellas normas vigentes, debe además de ello, integrar el derecho, respetar lo establecido por la Constitución y ser emitido conforme a las facultades expresas que han sido conferidas a la entidad emisora; por lo que de no ser así, se estaría incurriendo en nulidad, por su contenido ilegal, o incompetencia de la entidad que emite dicho acto, ya sea por territorio, materia, cuantía, grado, etc.

Por este principio se presume que no existen facultades supuestas sino solamente las que de manera expresa confiere la norma legal a los entes y a órganos que estas conforman, del mismo modo, el principio de legalidad insta a que dichas facultades sean desarrolladas solamente dentro de los fines que persigue el ente que ejercita determinada facultad, en consecuencia, un acto efectuado conforme a las facultades que la ley le ha otorgado, puede ser nulo si es contrario a los fines que el ente persigue.

Para Guzmán (2016), el principio de legalidad administrativa aplicado en la esfera del derecho administrativo sancionador, conlleva que solo por norma con rango de ley se puede atribuir a las entidades administrativas aquella potestad sancionadora y consiguientemente la previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción pueden ser aplicadas a los administrados. Por lo que la potestad solo es atribuida por ley y eventualmente mediante un decreto legislativo si es que la norma autoritativa así lo determina. (p. 34).

Asimismo, este principio implica en primer lugar, que la Autoridad Administrativa se encuentra sujeta íntegramente al ordenamiento jurídico, especialmente a la ley. Este principio es una permanente garantía de la existencia del Estado de derecho,

siendo uno de los pilares del mismo; ya que en un Estado de derecho la Administración se sitúa esencialmente como ejecutiva, por lo que esta encuentra en la ley su cimiento y límite de acción. Sin embargo, en la esfera del procedimiento administrativo sancionador esta garantía se intensifica en razón a que se basa de forma directa al rango de ley de la norma que le confiere potestad sancionadora. (Guzmán, 2016, p. 35)

En segundo lugar, la administración pública, a diferencia de los particulares, no goza de aquella libertad negativa prescrita en la Constitución “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe” o principio de no coacción, ya que solo debe hacer aquello para lo cual se encuentra facultada de manera expresa. La existencia de la discrecionalidad administrativa se encuentra categóricamente reducida y más aún si las potestades que le han sido otorgadas son de carácter sancionatorio que limitan los derechos de los administrados. (Guzmán, 2016, p. 35)

Según Roberto Dromi (1999), “[...] debe estatuirse que, en virtud del principio de legalidad, se alumbra y se delimita al procedimiento administrativo, por lo que constituye una condición esencial para su existencia”, por lo que resulta imprescindible para la administración la existencia del principio de legalidad en cuanto a su interactuar con los administrados por medio del procedimiento administrativo, máxime cuando su actuación comprenda limitaciones de derechos de estos mediante ejecución de sanciones facultadas por ley. (p. 61).

La motivación en los actos administrativos

Motivar es exhibir, explicar las razones o motivos por las que se toma una decisión, la motivación es aquella explicación que se otorga respecto al porqué se reconoce una determinada posición o contraria. Por ello, es un deber de aquel que toma la decisión, por otro lado, para la parte interesada es un derecho, el cual le permite conocer porqué se arribó a tal decisión, al mismo tiempo, saber de esto le permite impugnar dicha decisión.

Ahora bien, para que exista una decisión motivada debe haber coherencia entre lo que es materia de la decisión, las pruebas, los principios y las leyes aplicadas al caso específico, es a lo que se le denomina congruencia.

La motivación es un elemento esencial en todo pronunciamiento del órgano jurisdiccional en las resoluciones que este emite, puesto que es la razón de ser de la decisión del juez, respecto a determinado escenario jurídico en el que intervienen las partes. Del mismo modo, sucede en la Administración, la autoridad administrativa tiene como requisito de validez la motivación del acto administrativo, ya que es aquello lo que impulsa a determinar una decisión la cual se debe sustentar respetando los derechos de los administrados.

El Dr. Cervantes (2015), señala que “La motivación comprende la evaluación de los hechos y la valoración de los medios probatorios; la fundamentación consiste en la aplicación de las normas jurídicas al caso concreto”. (p. 85).

La figura de la motivación cumple un rol fundamental en la actividad administrativa en lo que respecta a los actos administrativos, tal es así que el artículo 6° de la ley 27444, modificada por el decreto legislativo N° 1272, establece que: “La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”.

En el artículo precitado se establece los parámetros los cuales la autoridad administrativa debe estimar al momento de emitir el acto administrativo, en el cual debe mediar una relación sólida y específica de los acontecimientos probados que poseen relevancia en el caso concreto, exhibiendo en él las bases normativas y jurídicas que mantengan un directo vínculo con los hechos probados, de forma que se deba justificar la razón de la decisión administrativa.

En el artículo 3° de la precitada ley, se establece los requisitos de validez del Acto Administrativo, teniendo a la figura de la motivación como uno de ellos. El cual señala que: “El Acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.”

Por cuanto, la administración al momento de emitir este acto, debe tener presente la figura de la motivación, puesto que ante la inexistencia de una debida motivación se percibiría la falta uno de los requisitos de validez.

En relación a la motivación, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia N° 2192-2004-AA/TC, ratificado en las STC N° 090-2004-A/TC y 4289-2004-AA. se ha pronunciado de la siguiente manera:

[...] el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones”. En la medida que una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria, sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.

Como podemos apreciar, el Tribunal Constitucional, resalta que la motivación además de ser una obligación para la administración, es también un derecho del administrado, ya que, al tratarse de una sanción administrativa, la cual va a causar una afectación al administrado, debe esta contener una decisión razonable con una certera motivación a fin de que el sancionado pueda ejercer su derecho de impugnar dicha decisión, contradiciendo lo que en ella se establece de manera precisa y clara.

Del mismo modo el mismo Tribunal ha resaltado lo prescrito por los artículos 3.4, 6.1, 6.2 y 6.3 de la Ley 27444, dispositivo que dispone qué para su validez:

El acto administrativo, este debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y de acuerdo al ordenamiento jurídico. La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, la manifestación de las razones normativas y jurídicas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. La motivación puede efectuarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de decisiones o informes obrantes en el expediente; por lo que resulta no aceptable como motivación, aquellas exposiciones de métodos generales o carentes de

fundamentación para el determinado caso o aquellos métodos que por su vaguedad, contradicción, oscuridad o insuficiencia no reflejen certeza para la motivación del acto. (Exp. N° 4123-2011-PA/TC).

Formulación del problema

De acuerdo a Ruíz, para iniciar una investigación cualitativa es fundamental que ésta se inicie con una definición más o menos concreta del problema que se va a investigar. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la definición inicial del problema pueda ser provisional ya que la finalidad de este tipo de investigación es indagar respecto de si la definición es correcta, así como también si la comprensión de ésta no está viciada por una comprensión viciosa. (Ruiz, 2012, pp.51-53).

Luego de haber puesto a la vista las pautas que indica el autor en el párrafo precedente, pasamos a definir el problema a indagar.

El problema del presente proyecto recae sobre la vulneración al derecho de defensa del administrado que es propietario del vehículo con el que se cometió la infracción, sin embargo dicha infracción fue cometida por una persona distinta al propietario, por lo que la administración sostiene que es aquel infractor quien posee legitimidad para obrar, por ende a él le corresponde efectuar el descargo contra el Acta de Control impuesta; impidiendo de esta forma que el propietario de dicho vehículo haga uso de su derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo sancionador.

Tal como se puede apreciar de lo dispuesto por la ordenanza N° 1599-MML, modificada mediante la Ordenanza N° 1974-MML, la cual señala lo siguiente

Artículo N° 89.- Plazo para la presentación de descargos:

89.1 El presunto infractor tendrá un plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación, para la presentación de su descargo ante la SFT. En el descargo presentado se podrán ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor.

Por lo que la administración considera que al no ser el propietario del vehículo quien comete la infracción, este no está facultado para realizar dicho descargo, pero sin embargo si es responsable del cumplimiento de la obligación conjuntamente con la empresa autorizada, que es el pago del Acta de Control impuesta. De ser el caso que este impugne dicha acta de control, la administración declara improcedente por falta de legitimidad para obrar, toda vez que considera que no está legitimado para efectuar descargo alguno respecto de la infracción cometida de acuerdo a la tabla de infracciones de la Ordenanza Municipal N° 1599-MML. En la que en primer lugar considera como responsable solidario a la empresa autorizada, y en segundo lugar al propietario.

Es decir, este último tiene la posibilidad de pagar el Acta de Control que fue impuesta a otra persona, sin embargo, no puede defenderse dentro del procedimiento administrativo sancionatorio con el fin de salvaguardar sus intereses, puesto que como se mencionó anteriormente, ejercer la defensa mediante la presentación del descargo contra el Acta de Control le corresponde al infractor.

Lo que resulta claramente lesivo al derecho al debido procedimiento y al derecho de defensa en el procedimiento administrativo, lo cuales son garantías constitucionales, ya que, pese a que la normativa constitucional establece que el debido proceso constituye una garantía constitucional, este también extiende su aplicación en la actuación de la administración, y ello lo ha puesto a relieve el máximo intérprete de la Constitución en reiterada jurisprudencia que mencionaré más adelante.

Del mismo modo, teniendo en cuenta lo referido en la ley 27444, artículo 51, inciso 51.2 la cual señala que [...] se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto [...] aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, poseen derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a tomarse [...].

Por tanto, contrastando ello con el contexto fáctico, es notorio que el propietario del vehículo con el que se materializó la infracción debe ser considerado un

administrado, puesto que de ello existirá alguna consecuencia la cual implicará una afectación sobre los intereses de este.

De ello, salta a la vista que existe una privación al derecho de defensa del administrado, ya que no se le permite ejercer dicho derecho realizando el descargo con la finalidad de salvaguardar sus intereses, toda vez que de acuerdo a la tabla de infracciones, el legitimado para realizar el descargo correspondiente es el titular de la infracción y para el pago de estas se considera como responsable solidario en primer lugar, como hemos señalado en párrafos anteriores, a la empresa autorizada, y en segundo lugar al propietario del vehículo.

Pues bien, como se aprecia de lo descrito en párrafos anteriores, es notoria la existencia de un problema que colisiona no solo con el derecho a la Defensa tutelada en la constitución política vigente sino también con el derecho al Debido Procedimiento, el mismo que deviene del Debido Proceso; toda vez que el administrado al no poder hacer efectivo su derecho de defensa resulta previsible que el procedimiento administrativo no se lleva acorde a ley. Según el art. 139.3 de la Constitución Política de 1993, sostiene en: “3. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.

Puesto a relieve la existencia de una realidad problemática es menester determinar los mismos de forma concreta.

Problema general

¿Existe vulneración del derecho de defensa del administrado en el procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción tipificada en la Ordenanza N° 1599?

Problemas específicos

a) ¿Tiene el propietario de un vehículo de transporte público legitimidad para impugnar un Acta de Control impuesta un conductor distinto al propietario?

b) ¿El SAT respeta el derecho de defensa del propietario de un vehículo, que impugna la imposición de una sanción producto de una infracción cometida por un conductor no identificado, dentro del procedimiento administrativo sancionador?

Justificación del estudio

“Todo proyecto necesariamente debe ser justificado, el investigador debe exponer, argumentar o sustentar las razones por las cuales se realiza dicha investigación y responder al porqué de la investigación”. (Carrasco, 2006, pp 117-118)

Es así que, para plasmar la justificación del presente estudio, debe tomarse en cuenta lo señalado por Carrasco Díaz, puesto que este es el punto en el que toda investigación expone los motivos por los cuales se realiza el estudio, es decir, responde a la pregunta del por qué se investiga. Respecto a esta última interrogante es que se verifica la existencia de razones fundamentadas que sustentan la elaboración del trabajo de investigación, fundamentación que sin duda alguna requiere todo proyecto investigativo.

Justificación metodológica

De acuerdo a lo acotado por Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómes, (2013). “La justificación metodológica se realiza cuando se emplea el uso de determinadas técnicas e instrumentos de investigación que pueden servir para otras investigaciones similares”. (p. 164).

Pues de ello se tiene que el presente estudio adopta técnicas para su desarrollo, así como también los instrumentos para la recopilación de información, aquellas trazarán la ruta metodológica que será de utilidad para posteriores investigaciones.

Justificación teórica

El presente estudio resulta necesario toda vez que mediante este se expondrá la incongruencia existente y el perjuicio que genera lo dispuesto por una norma de menor jerarquía como es la Ordenanza N° 1599 de la Municipalidad Metropolitana

de Lima, “que regula la prestación del servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana”; con lo regulado por la Ley 27444 – Ley del procedimiento administrativo general, y lo normado por la constitución política de 1993.

Este estudio describirá cuales son las desventajas y la vulneración a los derechos constitucionales que tiene un administrado dentro del procedimiento administrativo sancionador, dentro de un ámbito territorial determinado de aplicación. Así como la discordancia de la ordenanza en cuestión con las teorías y los principios acogidos por nuestro sistema jurídico.

Del mismo modo, la presente investigación resulta ampliamente relevante puesto que versa sobre dos derechos fundamentales, como son: el derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Derechos que se encuentran tutelados por la Constitución Política del Perú, así como también en constituciones de otros países, que han adoptado una postura definida respecto a estos derechos.

Existe disconformidad respecto a la Ordenanza N° 1599 con lo previsto en el 51.2 de la Ley 27444, en el que señala que tiene interés legítimo como administrado dentro de un procedimiento administrativo, quienes pueden resultar afectados por la decisión que adopte la administración. Es decir, no se debe privar de su derecho de defensa a ningún administrado que dentro de un procedimiento administrativo perciba una afectación por un acto administrativo.

Objetivos

Tal como señala Carrasco (2006), “los objetivos son propósitos esenciales que se alcanzarán como resultado del progreso del estudio investigativo, orientan el camino a seguir por el investigador”. (p. 159)

Los objetivos son el punto de inicial y final de la investigación los mismos que permitirán guiarnos respecto a las actividades a desarrollar para encontrar la solución al problema trazado, es preciso indicar que estos deben ser expuestos anticipadamente ya que de no ser así resultaría imposible iniciar y finalizar el trabajo de investigación.

Objetivo general

Analizar si existe vulneración al derecho al debido procedimiento dentro del procedimiento administrativo sancionador partiendo del respeto al derecho de defensa del administrado.

Objetivos específicos

- a) Determinar si el administrado propietario de un vehículo de transporte público posee legitimidad para impugnar un Acta de Control impuesta a otra persona en la que se le imputa responsabilidad solidaria.
- b) Analizar la posibilidad de que el administrado propietario de un vehículo de transporte público haga uso de su derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción de un tercero.

Supuestos jurídicos

Supuesto jurídico general

Se vulnera el derecho al debido procedimiento en un procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción de tránsito tipificada en la Ord. 1599-MML.

Supuestos jurídicos específicos

- a) Se declara improcedente la impugnación efectuada por el propietario de un vehículo por la infracción a la norma de transporte público tipificada en la Ordenanza 1599-MML cometida por otra persona.
- b) Existe indefensión del propietario de un vehículo en el procedimiento administrativo sancionador que pretende liberarse de responsabilidad por la infracción cometida por otro conductor.

II. METODOLOGÍA

2.1 Tipo de estudio

En la presente investigación se utiliza un método cualitativo, la cual se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto (Hernández, 2014, p. 358)

La investigación descriptiva tiene por finalidad responder numerosas preguntas que versan sobre cualidades, rasgos, características ya sean internas o externas, así como también fenómenos que se presentan en la realidad, entre otros sucesos que se presentan en un período de tiempo específico y concreto (Carrasco, 2006, pp. 41-43)

En la presente investigación se estudiará un fenómeno que es la contravención de la Ordenanza N° 1599 a lo establecido en la constitución política vigente de nuestro país, como también a la Ley del Procedimiento Administrativo General, los mismos que de acuerdo a la jerarquía normativa deben preponderar sobre lo establecido en el dispositivo en cuestión.

Asimismo, el escenario de estudio es la administración pública, para ser más precisos, en las actuaciones administrativas efectuadas en el Servicio de Administración Tributaria, respecto a los descargos efectuados por los administrados referidos a la imposición de las actas de control en los que se les imputa la responsabilidad solidaria por ser propietarios de los vehículos con los que se cometió la infracción de tránsito.

2.2 Diseño de investigación

“El diseño de investigación es un conglomerado de estrategias metodológicas y procedimentales determinadas y creadas de forma anticipada al desarrollo del proceso investigativo”. (Carrasco, 2006, p, 58)

En el presente trabajo se empleará un diseño de la teoría fundamentada, por lo que tal como señala Hernandez, Fernandez y Baptista (2014): “La teoría Fundamentada o también llamada teoría sustantiva, tiene como objetivo

desarrollar teorías, a través de situaciones o contextos particulares los cuales están basados en datos concretos que se encuentran en la investigación” (p.687).

Pues bien, el diseño de una investigación consiste en la planificación de tres tipos de acciones: las destinadas a establecer qué se va a investigar, las destinadas a definir cómo se va a investigar y las acciones destinadas a interpretar los hallazgos ya que:

El diseño no se debe confundir con el proyecto de investigación, que es el documento destinado a una institución o instancia de control, y que contiene, además de la información central sobre el diseño, una información concisa sobre los objetivos, las metas en tiempo y espacio, el plan de actividades, la estructura del presupuesto, etc. Es decir, contiene la información necesaria para el control de la gestión de la investigación. (Samaja, 1999, p. 204).

Pues bien, de acuerdo al autor citado, hablar del diseño de investigación es totalmente distinto a referirse al proyecto de investigación, puesto que este último es el producto o resultado del proceso de estudio que realiza el investigador que es dirigido a una institución, en este caso se presentará al finalizar el curso y que contiene variada información que no sólo aborda el tema del diseño de investigación sino también otros contenidos como los objetivos, tiempo, espacio, entre otras que se encuentran incluidas en el presente proyecto y se aprecian de forma detallada, mientras que el diseño es aquel camino que tomaremos para guiarnos y bajo el cual llevaremos a cabo la investigación.

2.3 Caracterización del sujeto

De acuerdo a la amplitud que abarca el campo del derecho administrativo se ha tenido por conveniente para el presente proyecto investigativo, la administración pública en la cual se desarrolla el fenómeno investigado, por ello, es que se considera a abogados especialistas en materia del derecho administrativa para que nos den su punto de vista jurídico y práctico el cual será materializado mediante entrevistas con preguntas abiertas para englobar y analizar los conocimientos de estos respecto del problema que se investiga.

Caracterización del Sujeto		
N°	Nombre	Profesión
1	Piero Alberto Lázaró Motta	Abogado / Especialista
2	Rubén Melitón Miraya Gutiérrez	Abogado / Especialista
3	Ricardo Adolfo Laynes Lau	Abogado / Especialista
4	John Peter Serquén Romero	Abogado / Especialista

2.4 Población y muestra

Se denomina población al conjunto de elementos pertenecientes a un delimitado espacio territorial en el que se manifiesta el problema que se investiga.

La población tomada para el presente análisis son especialistas del tema materia de estudio

Respecto a la muestra, Carrasco apunta que “Es la parte representativa de la población, la cual debe ser objetiva, como también contrastar a esta, de forma que de la obtención de los datos se permita generalizar todos los componentes de la población” (2006, p. 237).

Como muestra se tiene a los abogados especializados en materia contenciosa administrativa, quienes por su experiencia nos darán una opinión apropiada al tema materia de análisis en este estudio.

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Según lo acotado por Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómes: (2013) “Las técnicas e instrumentos de investigación son aquellos procedimientos y mecanismos que van a permitirnos obtener información y datos primordiales que resultan necesarios para contrastar el supuesto de investigación planteado”. (p. 201).

Se ha previsto para el trabajo investigativo, emplear la técnica de entrevista, puesto que tal como señala Fondevila y Olmo (2013): “[...] Es una de las técnicas más conocidas por la cual se obtendrá información directa de los entrevistados, lo

que nos permitirá complementar datos obtenidos mediante otras técnicas” (p. 146).

Asimismo, utilizaré la técnica de análisis jurisprudencial, puesto que en base al análisis de sentencias judiciales del Décimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima y de la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, referentes al problema que se investiga, se podrá contrastar los supuestos planteados en el presente trabajo de investigación.

Del mismo modo se empleará la técnica de análisis documental, a fin de obtener resultados de los documentos recopilados, los cuales luego de la discusión nos permitirá arribar a una conclusión.

2.6 Método de análisis de datos

Los datos obtenidos de las entrevistas a los abogados especialistas de la materia, serán examinados individualmente de lo obtenido de cada instrumento. Puesto que las preguntas que se efectuarán en las entrevistas serán abiertas, ya que de acuerdo a la metodología aplicada al presente estudio así lo establece, se analizarán las posturas de cada uno de los entrevistados las mismas que se contrastarán con los supuestos jurídicos que se exponen en el presente trabajo, para arribar a una conclusión en la cual se determinará si estos son acertados.

2.7 Tratamiento de la información

La información recopilada y utilizada en la investigación ha sido tratada de la siguiente forma:

Se recogió y analizó información relacionada para que exista consistencia mediante fundamentos lógicos que fueron aplicados a la presente investigación. Del mismo modo, se realizó entrevistas a especialistas en derecho administrativo, materia sobre la cual versa la problemática del presente estudio investigativo, para así obtener datos en base a las opiniones de expertos y contrastarlos posteriormente.

De la misma manera, se ha realizado el análisis jurisprudencial, respecto a sentencias emitidas por la Décimo Segunda Sala Contenciosa Administrativa de Lima, y la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima a fin de obtener datos que contribuyan con los objetivos planteados. Como también, se ha obtenido datos de fuentes documentales, las cuales son resoluciones administrativas emitidas por el Servicio de Administración Tributaria de Lima a fin para su análisis respecto al problema de investigación.

2.8 Aspectos éticos

El desarrollo de este proyecto de investigación ha seguido cabalmente los lineamientos planteados por la oficina de investigación de la escuela profesional de derecho de la Universidad César Vallejo en lo que respecta al año 2017.

Se ha cumplido con la normativa APA para la realización del citado de textos, contribuyendo de esta manera la comprensión del presente trabajo investigativo, así como también para respetar la autoría de los libros consultados que han sido de gran utilidad para que se pueda llevar a cabo este proyecto de investigación.

III. RESULTADOS

De la aplicación de los instrumentos empleados para la obtención de datos tenemos los siguientes:

3.1 Guía de entrevista. - Entrevista dirigida a abogados especialistas en derecho administrativo.

Objetivo General:

Analizar si existe vulneración al derecho al debido procedimiento dentro del procedimiento administrativo sancionador partiendo del respeto al derecho de defensa del administrado.

De los datos obtenidos mediante la entrevista realizada a los especialistas del tema materia de estudio se obtuvo lo siguiente:

Pregunta N° 1.- “¿Qué opinión tiene usted sobre el derecho al debido Procedimiento Administrativo?”

El entrevistado N°1 respondió:

En mi opinión, el debido procedimiento administrativo es un derecho sumamente importante, por cuanto es este el que va a garantizar que la administración pública lleve a cabo de manera correcta el procedimiento administrativo predeterminado por ley, respetando los derechos de los administrados. Cabe señalar que este guarda relación con el derecho al debido proceso que está contemplado en la normativa Constitucional.

El entrevistado N°2 respondió:

Es una garantía constitucional, en la cual, se le denomina debido proceso, sin embargo, esta figura no solo abarca los procesos judiciales sino también los procedimientos administrativos.

El entrevistado N°3 respondió:

El derecho al debido procedimiento, es un derecho irrestricto para cualquier administrado que se encuentre inmerso en un procedimiento administrativo, ya

que mediante este se garantizará que la decisión de la administración será de acuerdo a lo que le ley establece y respetando los demás derechos que esta abarca.

El entrevistado N°4 respondió:

Es una garantía constitucional que tiene todo administrado dentro de un procedimiento administrativo y que está vinculado a la tutela jurisdiccional efectiva, este derecho al mismo tiempo, garantiza que la existencia del derecho de defensa, derecho de impugnar la decisión tomada en este caso por la administración, presentar pruebas, etc.

Pregunta N° 2.- ¿Qué tan importante considera usted, que es el derecho de defensa en un procedimiento administrativo sancionador?

El entrevistado N°1 respondió:

Considero que es un derecho de gran importancia, puesto que en todo proceso y/o procedimiento, se debe garantizar el derecho de defensa, en este caso del administrado, puesto que, mediante este, se podrá realizar determinados actos impugnatorios a fin de que el administrado pueda fundamentar mediante pruebas el por qué no está de acuerdo con la sanción administrativa. Pruebas que la administración debe valorar al momento de emitir su decisión.

El entrevistado N°2 respondió:

Es de gran importancia en mi opinión, todo administrado debe gozar de este derecho, y más aún cuando se trate de sanciones impuestas por la administración, ya que estas van a generar afectaciones a quien se sanciona.

El entrevistado N°3 respondió:

Sumamente importante, porque si no le garantiza la defensa a un administrado en un procedimiento administrativo y más aún si es de carácter sancionatorio, nos encontraríamos ante una situación preocupante, puesto que existiría arbitrariedad

en la imposición de sanciones por parte de la administración, afectando severamente los intereses de los administrados.

El entrevistado N°4 respondió:

Es muy importante, ya que toda persona tiene derecho a la defensa de acuerdo a la constitución, y con mayor énfasis si se trata de un procedimiento sancionatorio, porque mediante el derecho de defensa el administrado podrá fundamentar su posición a fin de que no recaiga sobre él una sanción administrativa.

Se observa que todos los entrevistados concuerdan en sus respuestas y estas coinciden con el objetivo principal establecido en el presente estudio.

Objetivo Específico 1:

“Determinar si el administrado propietario de un vehículo de transporte público posee legitimidad para impugnar un acta de control impuesta a otra persona en la que se le imputa responsabilidad solidaria.”

Pregunta N° 3.- ¿Cree usted que se debe considerar como administrado en el procedimiento administrativo sancionador a los responsables solidarios que son propietarios de los vehículos con los que se cometió la infracción regulada en la Ordenanza N° 1599, de las actas de control impuestas a personas distintas al momento de la comisión de estas?

El entrevistado N°1 respondió:

Considero que se les debe considerar administrados en cuanto a la defensa de sus intereses corresponda. Puesto que, si estos no cometieron la infracción, deberá perseguirse la cobranza al infractor, ya que posteriormente al ser responsables solidarios, sobre estos recaerán las afectaciones dispuestas por la administración.

El entrevistado N°2 respondió:

Considero que, si se les debe considerar como administrados, toda vez que sobre ellos recaerá alguna medida tomada por la administración para cobrar el valor económico de la imposición del acta de control de acuerdo al código establecido en la tabla de infracciones.

El entrevistado N°3 respondió:

Creo que sí, siempre y cuando sea referente a sus intereses, ya que las actas de control se imponen en mérito a conductas infractoras y si existe dicha infracción alguien debe cumplir con el pago correspondiente.

El entrevistado N°4 respondió:

Si porque tal como lo señala el artículo 51 de la ley 27444, se considera administrado a los que posean derechos o legítimos intereses que puedan resultar afectados por la decisión administrativa.

Pregunta N° 4.- ¿Considera usted que el propietario del vehículo con el que se ha cometido una infracción regulada en la Ordenanza N°1599 por parte de un conductor distinto, se le permita presentar pruebas a fin de que este pueda liberarse de responsabilidad por la comisión de la infracción?

El entrevistado N°1 respondió:

Considero que sí, ya que, mediante las pruebas que estos ofrezcan se podrá determinar quién es el infractor, en el caso de que no se haya identificado, y de esta forma librarse de responsabilidad.

El entrevistado N°2 respondió:

En mi opinión si se les debe permitir presentar pruebas, ya que mediante estas podrán fundamentar las razones por las cuales ellos consideran que deben estar libres de responsabilidad al ente administrativo, y este deberá valorarlas.

El entrevistado N°3 respondió:

Considero que se le debe permitir exponer pruebas ante la administración ya que este es un derecho que forma parte de un debido procedimiento. Además, así se dirigirá la cobranza a quien corresponde.

El entrevistado N°4 respondió:

Considero que, si se les debe permitir ofrecer pruebas, ya que mediante esto estarían haciendo efectivo su derecho de defensa en el procedimiento administrativo y la administración debería valorarlas.

Pregunta N° 5.- ¿Cree usted que el SAT considera como administrado a los Responsables Solidarios que son dueños de los vehículos con los que se cometió la infracción regulada en la Ordenanza N° 1599, de las actas de control impuestas a personas distintas al momento de la imposición de estas?

El entrevistado N°1 respondió:

No los considera, en razón que según la administración, solo los infractores pueden impugnar las Actas de Control y la empresa autorizada de acuerdo a la Ordenanza 1599. Sin embargo, de acuerdo a la ley 27444, debería considerárseles como tal ya que poseen legítimos intereses.

El entrevistado N°2 respondió:

En estos casos, no los considera, ya que mantienen el criterio de que solo el infractor debe impugnar el Acta de Control, sin embargo, salta a la vista que, si el infractor no cumple con el pago de la deuda acaecida a raíz de esta acta, la cobranza se dirigirá al propietario del vehículo con el que se realizó la infracción que es del responsable solidario.

El entrevistado N°3 respondió:

No los considera, ya que solo sanciona a quien cometió la infracción. Sin embargo, si el infractor no cumple con el pago de la deuda por la imposición del Acta de Control, la cobranza se seguirá contra el propietario del vehículo a quien

se le podrá afectar sus bienes. Por eso creo que se le debe considerar dentro del procedimiento administrativo.

El entrevistado N°4 respondió:

No los considera porque de acuerdo a la ordenanza solo los infractores tienen la facultad de impugnar el Acta de Control, y en segundo plano las empresas autorizadas. Sin embargo, considero que, si se les debe considerar como administrados, ya que como dije antes, de acuerdo a la ley 27444, son administrados quienes posean derechos o legítimos intereses que puedan resultar afectados por la decisión administrativa.

Se observa que todos los entrevistados concuerdan en sus respuestas y estas coinciden con el objetivo número 1 establecido en el presente estudio.

Pregunta N° 6.- ¿Cree usted que posee legitimidad para obrar el propietario del vehículo de transporte público que desea impugnar un Acta de Control por la comisión de una infracción regulada en la Ordenanza N° 1599, impuesta a su vehículo mientras era conducido por una persona distinta?

El entrevistado N°1 respondió:

Por supuesto que sí, porque su bien puede ser afectado cuando se persiga la cobranza de la deuda del Acta de Control impuesta, por lo que considero que el propietario posee legítimos intereses y, por lo tanto, legitimidad para obrar.

El entrevistado N°2 respondió:

Por supuesto que la posee, ya que mantienen legítimo interés en el resultado del accionar de la administración que lo afectarán económicamente, puesto que posteriormente la cobranza alcanzará a los bienes del propietario del vehículo con el que se cometió la infracción, ya que la placa de rodaje de dicho vehículo se encuentra registrado en el Acta de Control, lo que resulta más sencillo para la administración al momento de perseguir el cobro de la deuda.

El entrevistado N°3 respondió:

Claro que posee legitimidad, porque como dije antes, si el infractor no cumple con el pago, se afectará a los bienes del propietario del vehículo con el que se cometió la infracción, por lo que estaríamos ante una afectación a sus intereses y por ello considero que el propietario si tiene legitimidad para obrar.

El entrevistado N°4 respondió:

Considero que sí tienen legitimidad para obrar dentro del procedimiento administrativo, porque como señalé antes, ellos poseen derechos e intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión que tome la administración.

Objetivo Específico 2:

“Analizar la posibilidad de que el administrado propietario de un vehículo de transporte público haga uso de su derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción de un tercero.”

Pregunta N° 7.- ¿Considera usted que se le deba permitir al Responsable Solidario de la imposición de un acta de control regulada en la Ordenanza N° 1599 ejercer su defensa permitiéndole impugnar dicha imposición?

El entrevistado N°1 respondió:

En mi opinión, si se le debe permitir, ya que como dije anteriormente, sobre sus bienes pueden recaer afectaciones posteriores al momento de la cobranza de la deuda no tributaria que podría recaer dentro de un procedimiento coactivo, en el que se trabarán medidas cautelares que afecten los intereses del propietario de dicho vehículo. Por lo que considero que en cuanto a lo que corresponde a su responsabilidad si se le debe permitir ejercer su defensa.

El entrevistado N°2 respondió:

Claro que se les debe permitir, porque es un derecho que les corresponde a todo administrado, además de esta forma podrán sustentar por qué no deben encontrarse sujetos a posteriores cobranzas que efectuará la administración.

El entrevistado N°3 respondió:

Claro que se les debe permitir, porque es un derecho que les corresponde a todo administrado, además de esta forma podrán sustentar por qué no deben encontrarse sujetos a posteriores cobranzas que efectuará la administración.

El entrevistado N°4 respondió:

Sí, porque es un derecho que a él le corresponde, es parte de la garantía al debido procedimiento administrativo.

Pregunta N° 8.- ¿Cree usted que al declarar improcedente (por falta de legitimidad) el descargo realizado por el Responsable Solidario respecto a la imposición de un Acta de Control, se le está vulnerando su derecho de defensa?

El entrevistado N°1 respondió:

Obviamente, porque al restringirle el ejercicio de este derecho, se verá expuesto sus bienes a afectaciones futuras dictadas por la administración, sin que se le haya permitido presentar algún medio impugnatorio que lo libere de responsabilidad en cuanto al pago de la sanción impuesta a otra persona.

El entrevistado N°2 respondió:

Sí, puesto que no se le puede restringir el derecho de defensa al administrado, este constituye uno de los derechos que forman parte de la garantía del debido procedimiento.

El entrevistado N°3 respondió:

Sí, porque al declarar improcedente un descargo se le priva su derecho de defensa, por reclamar algo en lo que posee legítimo interés, ya que como mencioné se verá afectado económicamente a futuro.

El entrevistado N°4 respondió:

Claro que sí, porque se estaría afectando su derecho de defensa por impugnar una decisión que tendrá consecuencia a futuro en sus intereses legítimos, que son la protección de sus bienes.

Se observa que todos los entrevistados concuerdan en sus respuestas y estas coinciden con el objetivo número 2 establecido en el presente estudio.

3.2 Instrumento N° 02: Guía de Análisis Jurisprudencial

Ahora pasaremos a exponer los resultados del segundo instrumento que consta en el análisis de jurisprudencia que consta de dos sentencias, una de ellas emitida por el décimo segundo juzgado contencioso administrativo de Lima, y de la cuarta sala especializada en lo contencioso administrativo.

3.2.1 Sentencia del Décimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima:

Sentencia emitida por el Décimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, de fecha 17 de noviembre de 2014, seguida mediante el expediente N° 1384-2014, en el cual la Sra. Irene Margarita Sánchez Pacheco demanda al Servicio de Administración Tributaria de Lima solicitando la anulación de la resolución de Asuntos Legales del SAT, resolución N° 179-158-00002475.

Objetivo principal:

“Analizar si existe vulneración al derecho al debido procedimiento dentro del procedimiento administrativo sancionador partiendo del respeto al derecho de defensa del administrado.”

Considerando primero: señala que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses con sujeción a un debido proceso, con las garantías y el respeto a los principios que inspira el proceso contencioso administrativo.

Considerando Noveno: [...] el demandante si cuenta con legitimidad para obrar, al tener intereses legítimos que resultan afectados con la sanción impuesta; por lo que lo resuelto en las resoluciones cuestionadas, ha vulnerado su derecho constitucional al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, al recortar su derecho de defensa.

Objetivo específico 1:

“Determinar si el administrado propietario de un vehículo de transporte público posee legitimidad para impugnar un Acta de Control impuesta a otra persona en la que se le imputa responsabilidad solidaria”.

Considerando Décimo: [...] si bien, la aludida infracción se encuentra dirigida a sancionar al conductor en su condición de responsable directo por habersele imputado en forma directa la presunta comisión de la infracción al momento en que fue intervenido, el artículo 100° numeral 100.2 de la Ordenanza N° 1599-MML, al señalar que, el propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas de responsabilidad administrativa de la empresa autorizada, esta judicatura concluye que, el propietario del vehículo resulta ser una garantía económica de la cobranza coactiva de la multa, y, por lo tal, mantiene un legítimo interés respecto a lo que se resuelve en el procedimiento administrativo. [...] ello de forma directa afecta los legítimos intereses del propietario, razón por la cual, esta magistrada reafirma que el demandante tenía legitimidad para cuestionar e impugnar tanto el acta de control, como la resolución de división que indebidamente le declaran improcedente por falta de legitimidad para obrar, por lo cual, la demanda incoada debe ser estimada en este extremo.

3.2.2. Sentencia emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima:

Sentencia emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 10 de mayo de 2016, seguida mediante el expediente N° 1384-2014, en mérito a la apelación formulada por el SAT, en el proceso seguido por la Sra. Irene Margarita Sánchez Pacheco contra el SAT.

Objetivo general:

“Analizar si existe vulneración al derecho al debido procedimiento dentro del procedimiento administrativo sancionador partiendo del respeto al derecho de defensa del administrado.”

Considerando Undécimo: [...] la decisión de la Administración ha afectado el derecho del actor a un debido procedimiento al no haber sido incorporado al procedimiento administrativo sancionador; y, como consecuencia de ello, la actuación de la administración ha vulnerado el principio del debido procedimiento, porque lo que la demanda merece amparo.

Objetivo específico 2:

“Analizar la posibilidad de que el administrado propietario de un vehículo de transporte público haga uso de su derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción de un tercero.”

Considerando Noveno: [...] la accionante, en calidad de propietaria de la unidad vehicular antes citada, si tiene interés legítimo en participar en dichos procedimientos, con la finalidad de poder defender su derecho de propiedad sobre el vehículo.

3.3. Instrumento N° 03: Guía de análisis documental

A continuación, se desarrollará la técnica de análisis documental, en la que se tiene dos resoluciones administrativas emitidas por el Servicio de Administración Tributaria de Lima, detallando los resultados obtenidos de estas.

3.3.1 Resolución N° 196-190-00025035: Emitida por el Servicio de Administración Tributaria en respuesta al descargo presentado por la Sra. Irene Sánchez Pacheco quien es propietaria del vehículo con el que otra persona cometió la infracción.

Objetivo específico 1:

“Determinar si el administrado propietario de un vehículo de transporte público posee legitimidad para impugnar un Acta de Control impuesta a otra persona en la que se le imputa responsabilidad solidaria”.

Considerando Primero: “[...] las sanciones y medidas preventivas de la Ordenanza 1599, se establece la responsabilidad administrativa respecto de las infracciones incurridas contra la Ordenanza que regula la prestación del servicio de Transporte Público regular de personas en Lima Metropolitana y de acuerdo a esta, la infracción de código N63, es de responsabilidad del conductor, por tanto, es el único legitimado para interponer el descargo correspondiente.

Que, siendo el conductor la persona responsable, en el presente caso, quien presenta el descargo es sujeto distinto al responsable, por lo que carece de legitimidad para obrar”

3.3.2 Resolución de Gerencia de Asuntos Legales N° 179-158-00002475: Emitida por el Servicio de Administración Tributaria en respuesta a la apelación contra la resolución de División N° 196-190-00025035 interpuesta por la Sra. Irene Sánchez Pacheco.

Objetivo específico 2:

“Analizar la posibilidad de que el administrado propietario de un vehículo de transporte público haga uso de su derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción de un tercero.”

Párrafo 5: “Que, en el presente caso [...] se advierte que, quien intenta impugnar es una persona distinta al responsable, por tal motivo, no cuenta con interés ni

legitimidad para obrar, correspondiendo declarar improcedente el presente recurso de apelación.”

IV. DISCUSIÓN

4.1 Instrumento 1: Entrevista

De la información recogida mediante el instrumento N° 1, la cual fue aplicada a 4 abogados especialistas, se tiene los siguientes datos:

Objetivo general:

“Analizar si existe vulneración al derecho al debido procedimiento dentro del procedimiento administrativo sancionador partiendo del respeto al derecho de defensa del administrado.”

Pregunta N° 1: Lázaro, Miraya, Laynes y Serquén concuerdan en sus respuestas considerando que el derecho al debido procedimiento es una garantía constitucional por lo que Lázaro señala: [...] derecho sumamente importante, por cuanto es este el que va a garantizar que la administración pública lleve a cabo de manera correcta el procedimiento administrativo predeterminado por ley [...].

Pregunta N° 2: Se aprecia que existe consenso entre las opiniones de los especialistas, considerando que el derecho de defensa es de suma importancia, puesto que Miraya señala que: [...] todo administrado debe gozar de este derecho, y más aún cuando se trate de sanciones impuestas por la administración, ya que estas van a generar afectaciones a quien se sanciona.

Con las respuestas obtenidas de las preguntas N° 1 y 2, se logra el objetivo general y del mismo modo se contrasta el supuesto jurídico general.

Objetivo específico 1:

“Determinar si el administrado propietario de un vehículo de transporte público posee legitimidad para impugnar un Acta de Control impuesta a otra persona en la que se le imputa responsabilidad solidaria”.

Pregunta N° 3: De los resultados en lo que respecta a esta pregunta se tiene que Lázaro, Miraya, Laynes y Serquén; creen que se les debe considerar como administrados a los propietarios de los vehículos con los que se cometió la infracción, por lo que Serquén resalta que: “[...] el artículo 51 de la ley 27444, se

considera administrado a los que posean derechos o legítimos intereses que puedan resultar afectados por la decisión administrativa”. Por tal razón se considera que los propietarios poseen legitimidad para obrar en lo que respecta a la impugnación del Acta de Control impuesta a una persona distinta.

Por lo que no se debe limitar a un administrado el ejercicio de su defensa cuando este posea legitimidad para obrar, criterio distinto que posee la administración al momento de resolver los descargos presentados por los administrados que tienen legítimos intereses.

Pregunta N° 4: Se aprecia que los entrevistados se muestran de acuerdo señalando que los propietarios de los vehículos con los que se cometió la infracción se les debe permitir presentar pruebas ya que tal como lo señala Lázaro “[...] mediante las pruebas que estos ofrezcan se podrá determinar quién es el infractor, en el caso de que no se haya identificado, y de esta forma librarse de responsabilidad.

Pregunta N° 5: Tanto, Lázaro, Miraya, Laynes y Serquén apuntan que la administración no considera como administrados a los propietarios de los vehículos dentro del procedimiento administrativo sancionador, por lo que Serquén señala que: [...] si se les debe considerar como administrados, ya que de acuerdo a la ley 27444, son administrados quienes posean derechos o legítimos intereses que puedan resultar afectados por la decisión administrativa”.

Pregunta N° 6: Los entrevistados consideran que los propietarios de los vehículos poseen legitimidad para obrar, en razón a que sus bienes serán afectados posteriormente, por lo que existe legítimos intereses de aquellos y consecuentemente deberían tener la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la administración.

Por lo que, como es obvio, al perseguir la cobranza del Acta de Control impuesta, se tendrá que afectar al vehículo con el que se cometió la infracción en razón a que este constituye una garantía económica para la administración, sin embargo, esta no prevé que la afectación recaerá sobre un sujeto distinto al infractor, lesionando así su derecho de defensa y al debido procedimiento, ya que al

momento en que el propietario realiza el descargo contra dicha imposición, la autoridad administrativa le responde denegatoriamente, quedando este en total desprotección ante las acciones de cobranza que la administración ejecute sobre su bien.

De ello se observa claramente que se cumple con el objetivo específico 1, puesto que se logra determinar que los propietarios de los vehículos con los que se materializó la conducta infractora poseen legitimidad para obrar en el procedimiento administrativo sancionador.

Objetivo específico 2:

“Analizar la posibilidad de que el administrado propietario de un vehículo de transporte público haga uso de su derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción de un tercero.”

Pregunta N° 7: Piero, Miraya, Laynes y Serquén, consideran que no se les debe restringir el derecho de defensa a los administrados propietarios de los vehículos de infracción por cuanto es parte de la garantía al debido procedimiento administrativo.

Pregunta N° 8: Los cuatro entrevistados consideran que se le vulnera el derecho de defensa a aquellos administrados que son propietarios de los vehículos con los que se comete la infracción por parte de una persona distinta y que la administración les declara infundado su descargo por considerar esta que aquellos poseen falta de legitimidad para obrar.

De las respuestas obtenidas en las dos últimas preguntas de este instrumento se cumple con el objetivo específico 2. Puesto que se estima que los propietarios de los vehículos con los que se ha cometido la infracción poseen legitimidad para obrar y por ende se les debe permitir ejercer su derecho de defensa dentro de este procedimiento, lo que en este caso en la administración no sucede, puesto como se ha podrá apreciar en las resoluciones administrativas que se anexan en el presente trabajo investigativo, la autoridad administrativa declara infundado el

descargo realizado por el propietario del vehículo con el que se comete la infracción por parte de otra persona.

4.2 Instrumento 2: Guía de análisis jurisprudencial

4.2.1 Sentencia del Décimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima:

Mediante expediente N° 1384-2014, doña Irene Margarita Sánchez Pacheco demanda al Servicio de Administración Tributaria, solicitando se declare la Nulidad de la Resolución de Gerencia de Asuntos Legales N° 179-158-00002475, por haber declarado infundado sus recursos de reconsideración y apelación; señala que el Acta de Control N° C345274 no cumplía con los requisitos de validez.

Asimismo, señala que se ha afectado su derecho de defensa, ya que pese a ser propietaria del vehículo con el que se cometió la infracción, el SAT le declaró infundada sus impugnaciones por falta de legitimidad para obrar mediante la Resolución de División N° 196-190-00025035, sustentando su posición en el artículo N° 69 de la Ordenanza N° 1599 y en la tabla de infracciones, sanciones y medidas preventivas de dicha ordenanza; en la cual establece la responsabilidad administrativa respecto a la sanción tipificada con el código N° N63, la cual señala que es el conductor el único legitimado para interponer el descargo correspondiente.

Del mismo modo, la precitada resolución administrativa señala que la empresa autorizada del vehículo con el que se cometió la infracción es quien será responsable solidario tal como lo señala la tabla de infracciones mencionada anteriormente por lo que dicha empresa podrá presentar el recurso de apelación, luego de que se le notifique la Constancia de Imputación de Responsabilidad.

Posteriormente la recurrente apeló dicha resolución, la cual fue confirmada por la Gerencia de asuntos legales mediante la resolución N° 179-158-00002475.

El juzgador, tal como pudimos apreciar de los resultados que, mediante el considerando undécimo, estimó que la decisión de la autoridad administrativa, en ese caso había afectado el derecho de la recurrente a un debido procedimiento, ya que esta no había sido incorporada al procedimiento administrativo sancionador, pese a que tenía legítimo interés y por ende, legitimidad para obrar. En consecuencia, se había vulnerado su derecho a un debido procedimiento por lo cual, declaró fundada la demanda, en consecuencia, declaró nula la resolución de Asuntos Legales N° 179-158-00002475, y ordenó que la administración emita nuevo pronunciamiento resolviendo de fondo el descargo y la apelación presentada por la demandante.

Pues de ello resulta contundente las afectaciones al derecho de defensa y al debido procedimiento que sufre un administrado dentro del procedimiento administrativo llevado a cabo por el Servicio de Administración Tributaria, garantías constitucionales que no pueden ser omitidas en ningún procedimiento administrativo sancionatorio.

Sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

De la sentencia de segunda instancia, apreciamos que la sala expresa en el considerando undécimo que: [...] la decisión de la Administración ha afectado el derecho del actor a un debido procedimiento al no haber sido incorporado al procedimiento administrativo sancionador; y, como consecuencia de ello, la actuación de la administración ha vulnerado el principio del debido procedimiento, porque lo que la demanda merece amparo.

Asimismo, señala que en su considerando noveno: [...] la accionante, en calidad de propietaria de la unidad vehicular antes citada, si tiene interés legítimo en participar en dichos procedimientos, con la finalidad de poder defender su derecho de propiedad sobre el vehículo.

Por lo que concluye en confirmar la sentencia apelada, que declaró fundada la demanda a favor de la Sra. Irene Margarita Sánchez Pacheco contra el Servicio de Administración Tributaria.

Siendo ello una clara muestra de la existencia de la vulneración al debido proceso puesto que no se le ha permitido al administrado ejercer su derecho de defensa con el fin de velar por sus intereses legítimos.

V. CONCLUSIONES

De toda la labor investigativa y luego de haber puesto en práctica los instrumentos idóneos para la obtención de datos certeros han contribuido a este trabajo de investigación, podemos concluir lo siguiente:

Primero. - Existe una deficiencia en el procedimiento administrativo sancionador llevado a cabo por el Servicio de Administración Tributaria, por la comisión de conductas infractoras a lo establecido por la Ordenanza N° 1599-MML, puesto que en él se vulnera el derecho al debido procedimiento, el cual es una garantía constitucional, tal como lo han señalado los autores que he citado en la presente tesis.

Segundo. - Existe una indefensión del administrado que es propietario de un vehículo con el que se ha cometido una infracción establecida por la ordenanza precitada, en tanto que se le deniega lo peticionado mediante descargo, señalando la administración que este carece de legitimidad para obrar. Criterio erróneo y carente de sustento legal, puesto como he podido contrastar, para estos casos, el administrado si posee legítimo interés para obrar y por lo tanto legitimidad para obrar dentro del procedimiento administrativo sancionador.

Tercero. - No existe un respeto al derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo sancionador llevado a cabo por el SAT, en cuanto le deniega al administrado que es propietario de un vehículo con el cual se ha cometido una infracción regulada en la ordenanza precitada, lo solicitado mediante descargo. Dejando de esta forma en estado de indefensión los intereses de este. Por cuanto la administración podrá ejecutar medidas preventivas a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación del pago del Acta de Control que fue impuesta a otra persona. Hecho que, sin dudas, es totalmente arbitrario e ilegal, en función a que no ha existido un debido procedimiento para el administrado.

VI. RECOMENDACIONES

Luego de exponer la deficiencia en lo que respecta al derecho de defensa y debido procedimiento en el procedimiento administrativo llevado a cabo por el SAT, referente a lo regulado por la Ordenanza 1599-MML, se recomienda lo siguiente:

Primero. - Modificar el Artículo N° 89.1, en lo que refiere a que “el presunto infractor tendrá un plazo de (7) días hábiles [...] para la presentación de su descargo. [...]” Permitiendo a quienes son propietarios de los vehículos con los que se materializa la infracción, a presentar el descargo a fin de que estos también pueden hacer efectivo su derecho de defensa en el procedimiento administrativo, para que así, se pueda garantizar un debido procedimiento administrativo; puesto como ya se mencionó, aquellos también resultarán desfavorecidos con las medidas adoptadas por la administración al momento de perseguir la deuda, ya que como lo ha advertido el Órgano Jurisdiccional en las sentencias citadas en la presente tesis; los propietarios poseen legítimos intereses los cuales pueden ser afectados.

Segundo. - Ampliar el criterio empleado por dicha administración al momento de resolver, puesto que no basta con aplicar la normativa sancionatoria que se les ha conferido, sino que deben tener en cuenta además de la aplicación del principio de legalidad, el derecho; tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Puesto que al declarar improcedente la impugnación efectuada por el propietario del vehículo, se afecta su derecho de defensa, pese a que estos poseen legítimos intereses y por ende legitimidad para obrar.

Tercero. - Permitir a los propietarios de los vehículos infractores, ejercer su derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador generado por la comisión de una infracción tipificada en la Ord. 1599-MML. Puesto que estos se encuentran en indefensión dentro del procedimiento administrativo en razón a que en este procedimiento se afectará sus intereses, por lo que, al momento de efectuar el cobro correspondiente al Acta de Control, se ejecutarán medidas contra los bienes del propietario del vehículo con el que se cometió la infracción, sin que se le haya permitido ejercer su derecho de defensa de manera oportuna a fin de salvaguardar sus intereses.

VII. REFERENCIAS

Referencias bibliográficas

- Carrasco, S. (2006) *Metodología de la investigación científica*, Perú: Editorial San Marcos.
- Samaja, J. (1999) *Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica*. Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- American Psychological Association. (2006). *Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association*. Versión abreviada. México: Editorial El Manual Moderno.
- Cadena, S. y Narváez, E. (2009). *Manual de redacción científica*. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente.
- Cervantes, D. (2015). *Manual de derecho administrativo*. Lima: Rodhas.
- Gordillo, A. (2000) *Tratado de derecho administrativo*, Argentina: Fundación de derecho administrativo.
- Hernández, R. Fernández C. y Baptista P. (2014). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Rojas, E. (2011) *El debido procedimiento administrativo*, Perú: PUCP
- Ruiz, J. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa*. España: Deusto.
- Ortiz, E. (1981) *Nulidades del acto administrativo en la ley general de administración pública*. Costa Rica: Revista del seminario internacional de derecho administrativo.
- Guzmán, N. (2016) *Los Procedimientos Administrativos Sancionadores en las entidades de la Administración Pública*, Perú: Gaceta Jurídica.
- Ossa, A (2009) *Derecho Administrativo Sancionador. Una aproximación dogmática*, Colombia: Legis.

- Dromi, R. (1999) *Derecho Administrativo*, Argentina: Ediciones Ciudad Argentina.
- Laubadere, A. (1999) *Tratado del Derecho Administrativo*. Francia: LGDJ.
- Sánchez, M. (2014) *Derecho Administrativo – Parte General*, España: Editorial Tecnos.
- Diez, M. (1981) *Manual de Derecho Administrativo T. II*, Argentina: Editorial Plus Ultra.
- Nunja, J. (2013) *Principios de defensa en el procedimiento administrativo sancionador*, Perú: Actualidad Gubernamental.
- Rojas, H. (2014) *Los principios Constitucionales limitadores del ius Puniendi ¿Qué límites rigen el Derecho Administrativo Sancionador en el Perú?*, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Oelckers, O (1999) *El derecho a la defensa del interesado en el procedimiento administrativo*. Chile: Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso.
- Ramírez, B (2006) *El Derecho a la Defensa en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio*. Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello
- Bacacorzo, G (1998) *Tratado de Derecho Administrativo*. Perú: Gaceta Jurídica Editores.
- Bartra, J (2002) *Procedimiento Administrativo*. Perú: Editorial Huallaga.
- Morón, J (2007) *Derecho Procesal Administrativo*. Perú: Página Blanca Editores).
- Ruiz, A (2000) *Manual de Derecho Administrativo, Segunda edición*. Perú: Gaceta Jurídica S.A.
- García, V (1995) *La Ley en el Perú*. Perú: Editora Jurídica Grijley

Benda, Maihofer, Vogel, Hesse, Heyde. *Manual de Derecho Constitucional*.
España: Ediciones Jurídicas y Sociales.

Constitución Política del Perú de 1993.

Constitución Política de Colombia de 1991.

Constitución Política de Ecuador de 1998.

Constitución Política de Bolivia de 2009.

ANEXOS

ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	Aplicación del debido procedimiento en los actos administrativos emitidos por el SAT en el marco del derecho de defensa como garantía constitucional
PROBLEMA GENERAL	¿Existe vulneración del derecho al debido procedimiento del administrado en el procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción tipificada en la Ordenanza N° 1599?
PROBLEMAS ESPECIFICOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Tiene el propietario de un vehículo de transporte público legitimidad para impugnar un Acta de Control impuesta a un conductor distinto al propietario? 2. ¿El SAT respeta el derecho de defensa del propietario de un vehículo, que impugna la imposición de una sanción - producto de una infracción cometida por un conductor no identificado, dentro del procedimiento administrativo sancionador?
SUPUESTO JURIDICO	Se vulnera el derecho al debido procedimiento en un procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción de tránsito tipificada en la Ord. 1599-MML.
SUPUESTO JURIDICOS ESPECIFICOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se declara improcedente la impugnación efectuada por el propietario de un vehículo por la infracción a la norma de transporte público tipificada en la Ordenanza 1599-MML cometida por otra persona. 2. Existe indefensión del propietario de un vehículo en el procedimiento administrativo sancionador que pretende liberarse de responsabilidad por la infracción cometida por otro conductor.
OBJETIVO GENERAL	Analizar si existe vulneración al derecho al debido procedimiento dentro del procedimiento administrativo sancionador partiendo del respeto al derecho de defensa del administrado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar si el administrado propietario de un vehículo de transporte público posee legitimidad para impugnar un Acta de Control impuesta a otra persona en la que se le imputa responsabilidad solidaria. 2. Analizar la posibilidad de que el administrado propietario de un vehículo de transporte público haga uso de su

	derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción de un tercero.
DISEÑO DEL ESTUDIO	Teoría Fundamentada.
POBLACIÓN Y MUESTRA	Para la presente investigación se contará con la presencia de Especialistas en Derecho Administrativo para las respectivas preguntas relacionadas al trabajo de investigación
RESULTADOS	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN
CONCLUSIONES	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: LAOS JARDALILLO ENRIQUE JORDAN
 1.2. Cargo e institución donde labora: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Entrevistas
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Diego Alonso Colán Achica

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías de los supuestos jurídicos.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuesto jurídico, categorías e indicadores.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos jurídicos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

95

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

95 %

Lima, 28 de Junio del 2017


FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 9944444 Telf.: 993 20 1314



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Wenzel Miranda Eliseo Segundo
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Diego Colón Achuire

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar los supuestos jurídicos.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos, variables e indicadores.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología de las estrategias en los supuestos jurídicos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, del 2017

Eliseo S. Wenzel Miranda
 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE
 ELISEO S. WENZEL MIRANDA
 Abogado
 CAL - 29482 DNI No. 09940214 Telf. 992303480

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: LA TORRE GUERRERO ANGEL FERNANDO
 1.2. Cargo e institución donde labora: Responsable De Responsabilidad Social E.P.Dirección
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Diego Colán Achurri

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											✓		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											✓		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											✓		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables del supuesto.											✓		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos, variables e indicadores.											✓		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.											✓		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

☒ SI

☐ NO

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

%

Lima, 23 de Julio del 2017

Diego Colán Achurri
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09961849 Telf.: 980-154944

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Galante Legara Omar Jesús
 1.2. Cargo e institución donde labora: Secretario Académico
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Resoluciones Administrativas
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Diego Alonso Colán Achuire

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.										X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar los supuestos jurídicos.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos, variables e indicadores.											X		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología de las estrategias en los supuestos jurídicos.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

%

Lima, 23 Junio del 2017

[Firma]
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 9376102 Telf. 05203303

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Galimeta Legana Omar Jesús
 1.2. Cargo e institución donde labora: Secretario Académico
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Resoluciones Administrativas
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Diego Alonso Colán Achuire

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.										X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar los supuestos jurídicos.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos, variables e indicadores.											X		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología de las estrategias en los supuestos jurídicos.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

%

Lima, 23 Junio del 2017

[Firma]
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 9376102 Telf. 95203353

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: LA TORRE GUERRERO, ANGEL FERNANDO
 1.2. Cargo e institución donde labora: RESPONSABLE DEL AREA DE RESPONSALES SOLICITUDES E.P. DENDUE
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Resoluciones Administrativas (02)
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Diego Colan Achuire

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											✓		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											✓		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											✓		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables del supuesto.											✓		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos, variables e indicadores.											✓		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.											✓		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

Lima, 23 De Junio del 2017

Diego Colan Achuire
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 04961247 Telf. 980) 53940

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: LA TORRE GUERRERO, ANGEL FERNANDO
 1.2. Cargo e institución donde labora: RESPONSABLE DEL AREA DE RESPONSALES SOLICITUDES E.P. DENDUE
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Resoluciones Administrativas (02)
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Diego Colan Achuire

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											✓		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											✓		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											✓		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables del supuesto.											✓		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos, variables e indicadores.											✓		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.											✓		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

Lima, 23 De Junio del 2017

Diego Colan Achuire
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 04961247 Telf. 980) 535940

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Loor Toranzo Enrique Gordon
 1.2. Cargo e institución donde labora: PROFESOR CATEDRÁTICO UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Resoluciones Administrativas (02)
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Diego Alonso Colán Arhuise

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												/	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												/	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												/	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												/	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												/	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías de los supuestos jurídicos.												/	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												/	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuesto jurídico, categorías e indicadores.												/	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos jurídicos.												/	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												/	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

95

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

95 %

Lima, 28 de Junio del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 8901152 Telf.: 997201314

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Wenzel Miranda Eliseo Segundo
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Sentencias (12)
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Diego Robn Achure

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.													✓
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													✓
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													✓
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													✓
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales													✓
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar los supuestos jurídicos.													✓
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													✓
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos, variables e indicadores.													✓
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología de las estrategias en los supuestos jurídicos.													✓
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													✓

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, del 2017

ELISEO S. WENZEL MIRANDA FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

Abogado
 CAL - 29482

DNI No: 9940260 Telf: 997303480

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Loas Torrealba Enrique Torrealba
 1.2. Cargo e institución donde labora: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO H.C.V.
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: sentencias (oz)
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Diego Colón Arduice

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												/	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												/	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												/	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												/	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												/	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías de los supuestos jurídicos.												/	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												/	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuesto jurídico, categorías e indicadores.												/	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos jurídicos.												/	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												/	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

95

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

95 %

Lima, 28 DE JUNIO del 2017


FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 03981111 Telf. 993 221714



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Galarreta Leearna Omar Jesús
 1.2. Cargo e institución donde labora: Secretario Académico
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Sentencias (2)
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Diego Alonso Colán Achire

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											X		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar los supuestos jurídicos.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											X		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos, variables e indicadores.									X				
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología de las estrategias en los supuestos jurídicos.											X		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.										X			

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

%

Lima, 23 del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 43761167 Telf. 992080331